

Suprema Corte:

—I—

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, provincia de Misiones, condenó a Carlos Humberto C. T. a la pena de prisión perpetua por considerarlo responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (cf. fs. 5-6 y 12 vta.).

Con posterioridad, a pedido de la defensa, el mismo tribunal le concedió provisoriamente el beneficio de la detención domiciliaria, para garantizar que se le brindara el tratamiento adecuado a su estado de salud. La decisión fue prorrogada en dos oportunidades por entender el tribunal que subsistía el cuadro clínico que justificaba la medida (cf. fs. 7 y vta.).

El fiscal impugnó la decisión que concedió el beneficio y, tras su declaración de inadmisibilidad, ocurrió directamente ante la cámara de casación, la que hizo lugar a su queja pero rechazó la pretensión de fondo.

A este respecto, el *a quo* expuso que no advertía que lo decidido provocara la afectación constitucional que alega el recurrente, en tanto el tribunal oral mantiene la detención domiciliaria mientras subsiste el cuadro clínico que padece el condenado. El fiscal, además, se limita a expresar su disconformidad pero no indica, según la cámara, por qué se debería revocar el beneficio (cf. fs. 7 y vta., y 2, respectivamente).

Contra esa decisión, el fiscal interpuso recurso extraordinario, cuyo rechazo motivó la presente queja (cf. fs. 3-14 vta., 18 y vta., y 19-23).

–II–

Creo que el recurso extraordinario debió ser declarado formalmente admisible, por los mismos fundamentos expuestos a este respecto en el dictamen emitido el 6 de septiembre de 2012 en el caso C. 902, XLVIII, “Comes, César Miguel s/recurso extraordinario”, a los que me remito en honor a la brevedad.

–III–

En cuanto al fondo del asunto, advierto que el recurrente, contrariamente a lo afirmado por el *a quo*, expuso claramente un motivo válido para pretender la revocación de la detención domiciliaria del condenado: la ausencia del requisito previsto en el artículo 32, letra “a”, de la ley 24.660, en el que se basó la concesión del beneficio.

En efecto, en el recurso extraordinario se recordó que este Ministerio Público objetó la decisión aduciendo que, de acuerdo con las conclusiones de uno de los peritajes llevados a cabo por el médico forense, el estado de salud del condenado es estable y su control y tratamiento pueden continuar en la prisión (cf. fs. 13 y vta.).

Por lo tanto, considero que el *a quo* no podía rechazar válidamente la pretensión del recurrente, sin considerar ese planteo conducente para la adecuada solución del caso, en tanto cuestiona, con base en prueba pertinente, la existencia del presupuesto en el que se apoya la concesión de la medida excepcional considerada. La decisión es, por ello, arbitraria.

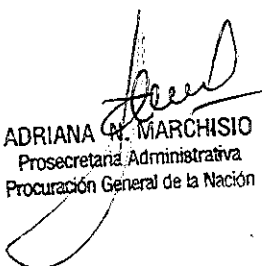
-IV-

Por lo expuesto, sin que esto importe abrir juicio sobre el fondo del asunto, mantengo la queja y opino que V.E. debe abrirla, declarar procedente el recurso extraordinario y revocar la decisión apelada.

Buenos Aires, 23 de MAYO de 2013.

ES COPIA

ALEJANDRA MAGDALENA GILS CARBÓ

  
ADRIANA M. MARCHISIO  
Prosecretaría Administrativa  
Procuración General de la Nación